



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Expte.: 38590/2016

**Autos: "ELECTRONIC SYSTEM S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA"**

Buenos Aires,

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

Que por resolución nro. 787/2015 (DI CRSS-DV REVA) del 29/6/2015 se desestimó el recurso de revisión administrativa presentado contra la resolución N° 2512/2014 (DV SSJB-DI CRSS) que no hizo lugar a la impugnación presentada por el contribuyente y en consecuencia confirmó la determinación de deuda por aportes y contribuciones, generadas en virtud de la O.I 125.706.

Que contra ello, se dirige el recurso de apelación obrante a fs. 57/71 .

Que en la nota de elevación de fs. 91 el organismo informa erróneamente el pago del depósito previo de la deuda, puesto que del escrito recursivo surge la manifestación del contribuyente de la imposibilidad del pago de la suma que se le reclama por lo que no puede cumplir con lo normado en el art. 15 de la ley 18820. Para ello, se basa en la apremiante situación financiera de la empresa y que de pagarlo sus obligaciones que hacen al curso normal de sus actividades se verían afectadas obstaculizando el normal desarrollo y funcionamiento de la misma.

Que esta cuestión, corresponde ser analizada previamente de manera de dilucidar la admisibilidad formal del remedio intentado.

Que en este orden, es oportuno precisar que, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades, que si bien el cumplimiento del recaudo apuntado resulta indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos. S.A. s/Impugnación actas de inspección", sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, consid. 10).

Que las particulares circunstancias de esta causa en que, como se verá, la accionada persigue el cobro de una deuda de muy vieja data, en su mayor parte ya prescripta, permiten encuadrar al sub examine en la última de las hipótesis de excepción indicadas en el párrafo anterior, por lo que corresponde declarar habilitada esta instancia y conocer del caso.

Que despejados los óbices formales a la procedencia del remedio intentado, cabe circunscribir el examen a la cuestión litigiosa a resolver esto es –más allá de las cuestiones desarrolladas en el escrito de apelación-, en primer lugar, si se encuentra o no prescripta la acción ejercitada por el organismo para percibir los aportes y contribuciones reclamados.

Que las actuaciones tuvieron su inicio con la Orden de Intervención. nro. 125706, que concluye con la determinación de una deuda por la falta ingreso de los aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social por los períodos 12/1998 hasta 02/2000, 04/2000 hasta 06/2000, desde 11/2000 hasta 01/2001, desde 05/2001 hasta 11/2001 y 4/2002.

Que ha de señalarse que conforme de las constancias obrantes en autos, las actuaciones tienen su origen en la comunicación cursada al contribuyente donde se dió apertura al cargo con fecha 18/4/2016 en los términos del art. 100 inc. e) de la ley 11.683.



Que, en este punto es importante destacar, en lo que hace al cómputo de la prescripción liberatoria, lo dispuesto por el art. 4017 C.C. –vigente al tiempo en que se devengó la obligación de pago-, en cuanto alude al tema en los siguientes términos: “por solo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título ni buena fe”. De ello se desprende que la eficacia de la prescripción “es independiente de la buena o mala fe del deudor”, como afirma Llambías en el Tratado de Derecho Civil - Obligaciones III, Ed. Perrot, pág. 311, quien agrega: “A diferencia del derecho canónico en que la prescripción sólo es alegable por el deudor de buena fe..., en nuestro derecho ese es un factor irrelevante”, ponderando ese criterio legal “por cuanto el fundamento de la prescripción es la utilidad social que resulta igualmente servida, aunque el deudor tenga conciencia de la subsistencia de su deuda, o sea tenga mala fe”.

Que el cómputo de la prescripción liberatoria cuando se trata de las acciones por cobro de aportes, contribuciones, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social se produce a los diez años de su devengamiento con arreglo a lo dispuesto por el primer párrafo del art. 16 de la ley 14236, de manera que, en el sub examine, resultan alcanzadas por la excepción los créditos originados con anterioridad a los diez años previos al reclamo.

Que, en otro orden cabe destacar que la conducta del acreedor no es ajena al vencimiento del plazo de la prescripción liberatoria, puesto que -como ocurre con habitualidad- en ejercicio de sus facultades de fiscalización y verificación, bien pudo haber promovido el reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno con presidencia de la existencia o no del expte. Administrativo que tramitó, a instancias de AFIP, ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que dicho organismo verifique si MERCADEO COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. cumplía con toda la normativa referida a las cooperativas y no resultaba ser una pantalla para encubrir un fraude laboral.

Que en otras palabras, no ha sido debidamente acreditado que el organismo recaudador ejerció en debida forma las atribuciones que le son propias o que, habiéndolo hecho, no pudo llegar a un resultado acertado. (C.N.Civ. Sala C, 6.5.86, L.L. 1987 - A - 241 y E.D. t. 119 pág. 265).

Que, en síntesis, sin que ello importe alentar actitudes evasivas de los obligados al depósito de aportes y contribuciones, ha de considerarse que la aplicación del derecho vigente a las constancias de la causa, cimentado en la preservación del valor de seguridad jurídica al que apunta el instituto de la prescripción liberatoria, no permite hacer excepción a la reglas contempladas por el citado Código cuyos alcances, en cuanto aquí interesa, no han perdido virtualidad a partir de la reforma aprobada por ley 26.994.

Que por lo arriba expresado, cabe hacer lugar a la prescripción opuesta por los créditos reclamados por períodos anteriores a los diez años previos al 18/4/2016, fecha en la que los instrumentos que dieron origen a las presentes actuaciones fueron notificados al ELECTRONIC SYSTEM SA. De tal modo, se declaran prescriptos los créditos devengados con anterioridad al 14/4/2006.

Por ello el Tribunal **RESUELVE**: 1) Hacer lugar al recurso deducido; 2) Admitir la prescripción liberatoria opuesta por la parte recurrente por los créditos devengados con anterioridad a los diez años previos al reclamo formulado por el organismo; 3) Dejar sin efecto la resolución cuestionada; y 4) Sin costas en la Alzada (art. 68 CPCCN.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

**SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 RJN).**

